

La derrota de la sociedad. Modernización y modernidad en el México de Norteamérica

SERGIO ZERMEÑO

I

EN ESTE artículo, buscamos entender el significado sociológico e histórico del proceso de modernización y apertura comercial en que México se ha inscrito a lo largo del último decenio, pues consideramos que las instituciones y los actores políticos y sociales, que son el objeto del debate en el presente volumen, han resultado severamente violentados.

En efecto, lo acontecido con nuestra globalización neoliberal pone de manifiesto que la integración comercial entre las naciones parece inevitable; pero al mismo tiempo ha dejado bien claro que los ritmos de esa integración son extremadamente lentos o, al menos, requieren de períodos mucho más largos que los contenidos en un sexenio o en un cuatrienio. Como las sociedades europeas lo han evidenciado a casi cuarenta años de iniciada la Comunidad Económica, todavía hoy importantes agregados sociales reaccionan con violencia cuando los ritmos del proceso de fusión atentan contra su integridad societal.

Comencemos señalando que lo que más llama la atención en la apertura transnacional y en las discusiones en torno al Tratado de Libre Comercio, es que si alguna fuerza ha podido detener el ritmo frenético que el gobierno mexicano quiso imprimir a estos cambios, no vino de la sociedad mexicana sino de Estados Unidos. Este último es, sin duda, el indicador más sobresaliente para comprender la aberrante articulación entre la sociedad y el Estado en México, y nos conduce a establecer una hipótesis: lo que a partir de los años ochenta se llama en México *modernización* (definida como globalización y competitividad transnacional) ha resultado un ataque furibundo contra los actores de nuestra *modernidad*.

En tal contexto, nuestra globalización se ha caracterizado ante todo por una destrucción sistemática de los más destacados actores de la sociedad civil, ya se trate del empresariado, de la etapa de sustitución de importaciones, de las capas medias de asalariados públicos, del proletariado industrial, de los sectores intermedios (especialmente de la burguesía mediana y pequeña), sin olvidar, en fin, los estragos en las estructuras sociales más sólidas del medio campesino (aunque no se trate ya de actores de la modernidad). Esto ha significado, además, la destrucción de las

instituciones y de los espacios de intermediación entre esos actores sociales y el Estado: sindicatos, organizaciones gremiales, partidos, universidades, medios de comunicación autónomos, identidades de lo social básico como los movimientos sociales, las asociaciones restringidas, etcétera.

Mientras que el proceso de industrialización clásico se dio a partir del desordenamiento del medio campesino y de la pobreza de los sectores miserables de las grandes ciudades, pero con el ascenso de los actores *sociales* de la modernidad (burguesía, proletariado, pequeña burguesía, sectores asalariados), el proceso de “modernización” de la globalidad subordinada, está implicando el desmantelamiento de los actores modernos en favor de un núcleo reducido y poderosísimo de empresas transnacionales asociadas a las cúpulas del poder político estatal, en medio de la desorganización, pauperización y anomia crecientes que hoy caracterizan a siete de cada diez mexicanos.

II

La crítica central al Tratado de Libre Comercio y a la integración globalizante que lo respalda, es que constituye un *disolvente poderosísimo de lo social*; de las identidades colectivas con consistencia social y continuidad, y de los espacios de interacción comunicativa y de formación crítica de lo público. En lo fundamental, esta pérdida de lo público no está ligada a la atomización del consumidor individualista-posesivo propia de los países centrales, sino a la incultura y la miseria masificadas que presagian el retorno de los liderazgos personalizados y autoritarios. La disolución de la sociedad se explica aquí de manera mucho más radical que en los países desarrollados por la conjunción de: a) una creciente **masificación** y pauperización producto de los cambios acelerados del nuevo modelo; b) una **desarticulación** acelerada de los actores de la sociedad civil, particularmente de los actores de la modernidad; c) un **retraimiento** en la vida privada por parte de los sectores integrados al consumo y a la modernización; d) una acción deliberada de los aparatos estatales que, conscientes de la precariedad del orden en esta situación de cambio acelerado y masificación, actúan en todos los frentes posibles buscando el **desmantelamiento** de las identidades colectivas inconvenientes, ya se trate de gremios, partidos, organizaciones sociales y políticas o de universidades, medios de comunicación, etcétera. En fin, e) una herencia histórica de la **mexicanidad** que embona perfectamente en esta “derrota de la sociedad frente al Estado” en que se ha constituido el neoliberalismo mexicano.

Es importante dejar claro, como lo hemos expresado con detenimiento en otros trabajos ¹, que el primero de los *disolventes de lo social* antes aludidos, no de-

¹ Zermeño, Sergio, “Desidentidad y desorden: México en la economía global y en el libre comercio”, *Revista Mexicana de Sociología*, año LIII, núm. 3, julio-septiembre de 1991, Zermeño, Sergio, “México neoliberal: ¿Globalización autoritaria con tránsito a la democracia?”, *Nueva Sociedad*, núm. 121, Caracas, 1992.

pende más que secundariamente del proyecto globalizador. En efecto, la urbanización acelerada y la explosión demográfica, en tanto **primera fuente de desorden**, se manifiestan con vigor desde los años sesenta y setenta como producto de un crecimiento económico que en América Latina fue más acelerado, por ejemplo, que el de Estados Unidos durante su “despegue”: 4.8% del PIB anual entre 1870 y 1906, comparado con el 5.5% de América Latina entre 1950 y 1980.² Resultado de ese primer desorden fueron la explosión demográfica, la urbanización salvaje y la degradación ecológica.

Es importante destacar también que la crisis de los años ochenta, digamos **una segunda fuente de desorden**, resultó aún más brutal debido al total estancamiento en que cayó América Latina justo cuando ya se había adaptado a esa lógica de alto dinamismo. Como hemos afirmado, a diferencia del resto de esta región, en México el crecimiento económico no sólo no cayó durante los años setenta sino, por el contrario, encontró en los dólares del *boom* petrolero y en los “préstamos dulces”, el combustible para la aceleración y para los “proyectos faraónicos”. El severo estancamiento de los años ochenta desordenó aún más a esta sociedad altamente dinámica, y todavía no logramos hacer el recuento de la “pedacería social” producto de semejante desastre. Recordemos solamente dos hechos: los salarios mínimos entre 1980 y 1990 cayeron 40% en toda la región, aunque con claras diferencias entre los países: en Perú 15%, en Bolivia, Ecuador y Panamá 33%, en México 40%.³ Otra fuente asegura que entre 1980 y 1989 el gasto en salud en México cayó de 2.5% a 1.4% del PIB y del 6.2% al 2.5% del gasto del sector público.⁴ Pero una vez más las comparaciones vienen al caso: México gastó en 1990 el 2.4% de su PIB en prestaciones sociales, frente al 12.3% erogado por Estados Unidos y 18.8% que destina Canadá a este rubro⁵.

III

Ahora bien, de entre los fenómenos descritos debemos distinguir, por un lado, aquéllos ligados al pasaje de la sociedad tradicional a la moderna, y los ligados a la crisis de estancamiento de los años ochenta y, por otro lado, los que son producto de las políticas de la globalización y de la apertura económica. Estos últimos aparecen al inicio de los años ochenta, se acentúan con nuestra entrada al GATT en 1985, y amenazan con magnificarse al ponerse en marcha el Tratado de Libre Comercio. A esto lo podríamos llamar un **tercer efecto desorganizador**. Como lo han mostrado la sociología clásica y la contemporánea, los cambios de ritmo, las perturbaciones severas del orden colectivo, las modificaciones violentas del entorno social debido a las migraciones, las catástrofes, etcétera, llevan al individuo a perder control sobre su entorno, a perder los límites morales compartidos social-

² Tokman, Víctor, "El imperativo de actuar. El sector informal hoy". *Nueva Sociedad*, núm. 90, 1987.

³ *El trabajo en el mundo*, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1993.

⁴ Laurell, Asa Cristina, "Reestructuración productiva y salud obrera", *El Cotidiano*, núm. 20, 1987.

⁵ *El trabajo en el mundo*, *op.cit.*

mente, a la anomia y, para recurrir a los términos más clásicos, a no nombrar y no verbalizar, que son el origen de la desidentidad y el desorden.

La magnitud de este tercer efecto desarticulador queda de manifiesto cuando recordamos que entre 1980 y el año 2 000 los hombres (y sobre todo las mujeres jóvenes) que trabajan en las industrias maquiladoras de la franja fronteriza habrán aumentado de 100 000 a un millón (el 33% de la población manufacturera del país).⁶ Esto podría significar, tomando en cuenta las unidades familiares, una clara “norteñización” de la economía y de la población mexicanas.⁷ Severos cambios habrán de derivarse también de la llamada desindustrialización paralela a toda apertura comercial y que, sin tomar en cuenta la destrucción de la gran empresa de la etapa de sustitución de importaciones, ha significado ya el cierre de 70 000 medianas y pequeñas empresas en menos de ocho años; el 50% del total (encontrándose amenazadas dos de cada cinco de las restantes).⁸ Recordemos, en fin, que entre tres y quince millones de campesinos podrían ser afectados, dependiendo de la severidad de la apertura comercial, de la desaparición de los subsidios gubernamentales y de la entrada a nuestro país de productos agrícolas básicos a precios muy reducidos.⁹ Agroindustrialización y desaparición del ejido en el norte y en el sur, emigración, autoconsumo defensivo y atraso en ejidos y comunidades sin ningún atractivo para el capital, podrían ser características de esta nueva etapa del agro.

Por otra parte, las condiciones de trabajo y de vida barrial de los obreros y obreras de la maquila (70% mujeres y 8 de cada 10, menores de 24 años)¹⁰ y las de los jornaleros agrícolas ligados a las agroindustrias, ponen de manifiesto que pobreza y empleo ya no son atributos excluyentes sino que, en el futuro, obtener un empleo ligado a la producción industrial transnacionalizada, no significará abandonar la situación de precariedad.¹¹ Y lo que es más grave, sólo una minoría

⁶ González Aréchiga, Bernardo y José Carlos Ramírez, “Definición y perspectivas de la región fronteriza”, *Estudios Sociológicos*, núm. 7, 1990; Ganster, Paul y Alan Sweedler, “The United States-Mexican Border Region: Security and Interdependence”, en Ochoa y Lorey, *U.S.-Mexico Border Briefings in Los Angeles y Tijuana*, en *Readings, UCLA*, Program on Mexico, 1990.

⁷ De la Garza, Enrique, “Desindustrialización y reconversión en México”, en *El Cotidiano*, núm. 21, enero-marzo, 1988; Ganster y Sweedler, op. cit.

⁸ Barranco Chavarría, Alberto, “La escaramuza de los textiles”, *La Jornada*, 30 de julio, 1991; De la Garza, Enrique, “Reconversión industrial y polarización del aparato productivo”, en Garavito y Bolívar, *México en la década de los ochentas: la modernización en cifras, UAM (A)-El Cotidiano*, México, 1990; Lovera, Sara, “Por un año más habrá apertura en textiles”, *La Jornada*, 30 de julio, 1991.

⁹ Calva, José Luis, “Efectos de un acuerdo de libre comercio en el campo mexicano”, *Revista Mexicana de Sociología*, año LIII, núm. 3, julio-septiembre de 1991; Carton de Grammont, Hubert, “El futuro del campo mexicano frente al Tratado de Libre Comercio”, *Revista Mexicana de Sociología*, op. cit.

¹⁰ Carrillo Jorge, “Mercados internos de trabajo ante la flexibilidad: análisis de la maquiladoras”, en González Aréchiga y Ramírez, *Subcontratación y empresas transnacionales*, El Colegio de la Frontera Norte-Fundación Frederick Ebert, 1990; Sklair, Leslie, *Assembling for Development, the Maquila Industry in Mexico and the United States*, Unwin and Hyman, Boston, 1989; De la Garza Toledo, Enrique, “Reconversión industrial y cambio en el patrón de relaciones laborales en México”, en Anguiano, *La modernización de México*, UAM-X, México, 1990.

¹¹ Díaz, Alvaro, “Nuevas tendencias en la estructura social chilena: asalarización informal y pobreza en los ochentas”, *Proposiciones*, núm. 20, Santiago, 1991.

de esa gran masa de migrantes jóvenes que se dirigirán a las regiones agroexportadoras del norte, a Estados Unidos y a las grandes ciudades, encontrará un empleo regularmente remunerado debido a la modernización con exclusión que afectará al agro y a la debilidad de todo el modelo para absorber productivamente a los hijos del libre comercio y de la reconversión. Algunos analistas establecen que la creación de empleos en el país fue de sólo 1.3 millones entre 1982 y 1990, contra 1.5 millones de jóvenes que se incorporan cada año como demandantes de trabajo, lo que ha creado una reserva de 8.9 millones de personas que no han sido absorbidas por el mercado de trabajo, y de las cuales se estima que más de la mitad están en Estados Unidos en forma ilegal.¹²

IV

Junto con el debilitamiento de lo público derivado del desorden anómico en el ancho mar de los excluidos, hay que reseñar un fenómeno adicional que trabaja en el mismo sentido: en efecto, los sectores mejor integrados de las clases medias y altas se caracterizan, en estas sociedades, como también en las más desarrolladas, por un individualismo posesivo centrado en el consumo personalizado. Para este medio social, el neoliberalismo ha venido a convertirse en una ideología que va mucho más allá de lo meramente económico, mucho más allá de una simple política para salir de la crisis, constituyéndose en el instrumento moral para justificar la desigualdad social creciente, para no confrontar más, en forma de culpa, la pobreza generalizada, el entorno deshumanizado, gracias a la aparición de un tercer actor a quien culpar, un tercero entre los desheredados y yo: el Estado (keynesiano, populista, socialista), que fue hegemónico en la etapa histórica anterior a la presente y a quien se puede acusar como el verdaderamente culpable de los vicios que hoy padecemos debido a sus errores y su corrupción. A partir de ahora, según esta visión, nos toca vivir una época de reconstrucción, de penitencia, de expiación, de sacrificio, que recaerá en las grandes masas por haber creído en la salida irresponsable del estatismo, del corporativismo, del anonimato comunitario. Se justifica mi reclusión en lo individual, en la familia, el pequeño grupo profesional o político, la banda, la generación escolar, la cofradía tecnoburocrática, la vuelta al trabajo como ejercicio privado, como esfuerzo de cada uno ante Dios; mientras se reconstruye la riqueza dilapidada por el patrimonialismo, por los corporativismos y por el centralismo corrupto.

Estos sectores integrados de nuestras sociedades votan y se inconforman furiosos por los fraudes electorales que requiere el neoliberalismo para cambiar las leyes mediante el "mayoriteo" parlamentario, pero reprueban el desbordamiento popular, en tanto heraldo de nuevos liderazgos patrimoniales, en tanto motor de desestabilización de una sensible economía internacionalizada; en realidad, de un estado de cosas que favorece a la clase media integrada al mundo moderno.

¹² Calva, José Luis, *La Jornada*, 16 de nov., 1991.

Sea como fuere, un fenómeno parece alarmante y nos coloca frente a la necesidad de repensar, entre otras cosas, el tipo de democracia que creemos estar instaurando en América Latina. Estamos asistiendo a una fragmentación de los mercados políticos de manera que los sectores con mejores ingresos, mayor cultura, mejor educación y, en una palabra, los sectores mejor integrados a la modernización parecen aprovechar, de forma mucho más intensiva que en el pasado, los canales de la política y de la vida pública en general (partidos, parlamento, medios de difusión, universidades, espacios educativos y culturales, organismos gubernamentales, etcétera); mientras que los sectores menos integrados, se recluyen en el desorden, la atomización, la desidentidad, la anomia, la apatía y, como en un círculo vicioso, en la falta de participación en los espacios abiertos por la referida política liberal-democrática.

Esta segmentación de los espacios de lo público, la reclusión de los sectores integrados en lo privado, así como el desorden y la dispersión en que viven dos de cada tres mexicanos, ¿nos permite hablar, como se pregunta el brasileño Alvaro Moises, del enraizamiento en lo social de una cultura democrática, de la generalización de una pauta de valores compartidos entre los diferentes segmentos en que se divide la población, consolidando un complejo de instituciones, procedimientos y orientaciones culturales con cierta estabilidad y capaz de alentar la participación del hombre común en los asuntos públicos?

V

Aquí se ubica el punto neurálgico del actual modelo societal mexicano ligado a la globalización, y sin duda también el latinoamericano, pues el ascenso de regímenes políticos vía la democracia electoral, no conduce a una mayor participación de la sociedad en los asuntos públicos sino que, más bien, dichos regímenes se apresuran a inhibirla como única vía para llevar adelante la reforma neoliberal de la economía. En efecto, desde el momento en que los regímenes de la llamada "transición a la democracia" aceptan abiertamente que la reconversión, la globalización y el libre comercio exigen políticas de ajuste que implican la exclusión y pauperización de enormes masas durante una etapa que puede ser larga, aceptan, al mismo tiempo que atravesarán por períodos de inestabilidad sociopolítica que pueden ser muy peligrosos para el modelo en su conjunto (Venezuela comienza a ser el paradigma negativo a este respecto); períodos de inestabilidad que tendrían su origen en ciertas constelaciones de los actores sociales más afectados por los cambios. En tales condiciones, y con la certeza de que relanzar el crecimiento es el "fin" buscado a toda costa, algunos "medios" justifican, supuestamente, y de manera inmediata el actuar preventivamente desalentando, o francamente dismantelando, la constitución de identidades sociopolíticas alternativas y de espacios públicos de interacción comunicativa, espacios de construcción de identidades

colectivas que puedan volverse inmanejables o exigir del Estado compensaciones y subsidios que malogren la radicalidad y la agilidad que el reordenamiento requiere.

Así pues, entre lo social disperso y el Estado, se encuentran muchas constelaciones que sufren este embate, y ello se constituye en uno de los factores “disolventes” más poderosos, aunque no únicos, de lo social. En efecto, hoy podemos establecer la hipótesis de que ha habido en México, a partir de los años ochenta, un debilitamiento palpable de los órganos y espacios de mediación. Enumeremos: 1) en el **plano propiamente social**, hoy podemos constatar en México, y también en América Latina, la crisis generalizada de los *movimientos* y las *luchas sociales*, la destrucción de la *acción sindical*, la *prohibición de las huelgas* y otras acciones directas que buscan una mínima continuidad o identidad; 2) en el **plano organizativo social con cierta institucionalización** sucede lo mismo; hay una crisis de los *frentes*, *coordinadoras*, *asambleas*, *sindicatos*, *confederaciones sindicales*, *obreras*, *agrarias*, *uniones de pueblos*, *colonias*, *órganos vecinales*, *comunidades eclesiales*, etc.; 3) en los **espacios institucionalizados de lo público**, como el *sistema escolar*, *universitario*, de la *cultura* y en los *medios de comunicación* en general, también constatamos el mismo vaciamiento de la participación colectiva en aras del eficientismo científico-técnico, y asistimos al desmantelamiento de lo que alguna vez fueron los aparatos asistenciales con fuerte participación social como el *sistema de salud*, de *abasto*, de *transporte*, de *vivienda*; 4) las **instituciones propiamente políticas** de la sociedad: partidos y organizaciones políticas, parlamento, asambleas de representantes, cúpulas sindicales, patronales, sectoriales, grupos de interés, de presión, de opinión. Creemos que la hipótesis sobre el debilitamiento de lo público y de la sociedad moderna puede ser sustentada en todos estos terrenos, aunque aquí sólo podamos desarrollar algunos de ellos.

VI

Lo que debemos recordar, en fin, es que cuando las intermediaciones entre lo social y lo estatal son pobres históricamente, y lo son además por el cambio acelerado, el desorden anómico, la reclusión en lo privado, la segmentación de los mercados políticos y la acción deliberada desde el Estado para la pulverización de identidades, los miembros de una sociedad, sobre todo aquella gran mayoría que vive en la precariedad, se sienten aislados, solos, incapacitados para hacer frente a su situación por ellos mismos o por su grupo social en desintegración, y apelan al líder como única esperanza para superar su situación desdichada. Ya se trate de Cuauhtémoc Cárdenas o Carlos Salinas, Alan García o Fujimori, Lula o Menem, Carlos Andrés Pérez o el que le siga, el hecho es que vivimos un regreso del verticalismo, en lugar de un reforzamiento de lo social, y de ello se aprovechan y lo alimentan, programas del gasto público encaminados al culto de la personalidad,

como son los programas de solidaridad tan recomendados por el Banco Mundial y el FMI para atacar los focos peligrosos de pobreza extrema y formación de identidades y acciones, aunque sea coyunturales, en el seno de lo popular.

En consecuencia, el TLC, el proyecto globalizador y la *modernización* salvaje que los acompaña constituyen, como lo establecíamos al inicio de este trabajo, poderosos disolventes de la sociedad civil mexicana, de lo poco de *modernidad* que logró México durante la etapa de sustitución de importaciones. En este contexto, el discurso en torno a la “transición hacia la democracia” y al “liberalismo social” con que se hace acompañar el régimen político mexicano, difícilmente encuentra sustento sociológico y tiene que conformarse con magnificar la existencia de un sistema electoral, partidista y parlamentario prácticamente intervenido de manera policiaca a través del fraude, la corrupción, el fomento deliberado de escisiones, el monopolio de los medios de comunicación, etc.

Si los maharajás y los faraones disponían de toda una vida para fundar ciudades y construir pirámides, a nuestro grupo gobernante se le nota a todas luces presto a reconvertir y globalizar todo; urgido por aplicarle a esta sociedad lo que en los países de origen liberal y largamente modernizados de Occidente se ha venido imponiendo en medio de una difícil correlación de fuerzas sociales y políticas, sin haber logrado, aún, carta de legitimidad.

Algunos lectores acostumbrados a lo inevitable se preguntarán si todos estos devaneos no son una queja ante lo que no tiene remedio; es decir, dado que la integración de México a Estados Unidos es un hecho irreversible, un fenómeno silencioso (“*silent integration*”), como Clark Reynolds lo denominó hace muchos años, ¿cuál es la diferencia entre ir más rápido o más despacio hacia el mismo destino?

Nos vemos obligados aquí a presentar una respuesta directa y a tomar una posición: desde el punto de vista societal, los cambios inesperados, los desórdenes intempestivos, repercuten casi por lo regular en anomias severas; ante tales sismos, intervienen actores relativamente externos tratando de amortiguar los impactos de mayor descontrol: el Estado, los partidos y las organizaciones políticas, gremiales o religiosas, los intelectuales, etcétera. Cuando esto no sucede y, por el contrario, tales fuerzas se suman activa, acriticamente incluso, a las corrientes desordenadoras, fuertes sobresaltos “epocales” pueden desatarse. ¿Para qué recordar al jacobinismo, algunos populismos, el estalinismo, los fascismos? Pues bien, lo que aquí sostenemos es que hay elementos suficientes para afirmar que el Estado mexicano hoy en día, no sólo no intenta moderar las fuerzas que están devastando nuestra sociedad y nuestra cultura (nuestras intermediaciones modernas y premodernas), sino que se une a ellas atizándolas en un esfuerzo osado por trascender como un régimen refundador de la historia nacional. El cambio acelerado (el ajuste, el reordenamiento) que parece tan saludable para la economía, está resultando fuente de anomia severa para la sociedad (desorden, desidentidad), cuando además, los actores robustos de la sociedad moderna no tienen cabida en el modelo de la globalización.

VII

Ahora bien, a este vaciamiento de lo público coadyuva, en el caso de México, un rasgo muy propio de nuestra matriz de funcionamiento sociopolítico: esa propensión de las dirigencias, las élites, los representantes y la intelectualidad a ser atraídos mucho más por el vértice de la pirámide que por la base.

La cultura política de una sociedad se forma históricamente. Si por razones geográficas, étnicas, guerras civiles o exteriores se logra perfilar un Estado poderoso junto a unos actores sociales endeble en un plazo histórico prolongado, incluso secular, como en el caso de México, esa experiencia definirá una matriz de relación entre sociedad y Estado, una cultura política que “impregna” en su conjunto a la sociedad en cuestión, no sólo a los “poseedores” del Estado, sino también a quienes están afuera y a quienes se le opongan. Todo el conjunto finca sus acciones en una misma axiología, establece objetivos de conquista y reproduce una retórica y unas formas organizativas similares, aunque se trate de bandos que se reconocen como antagónicos en la política y con ideologías particulares que se excluyen recíprocamente. En un país con un fuerte Estado ancestral, la acción política de las élites —ya sea en el gobierno o en la oposición— tiende a organizarse en torno al lugar desde donde todo parece posible (el vértice), y ese afán compartido reproduce y alimenta la matriz social, cultural y política históricamente formada en el autoritarismo (durante el propio movimiento del 68 los estudiantes se dedicaron a construir una especie de soviét supremo que llevó por nombre Consejo Nacional de Huelga, tan piramidal como el del adversario, de quien exigían democracia).

Es quizás esta búsqueda del vértice, como única opción de identidad, y este vacío crónico de los espacios de intermediación, lo que nos explica el funcionamiento cíclico de sociedades como la mexicana, en la que, a un larguísimo período de orden asegurado por el autoritarismo de un actor central, sucede un derrumbamiento casi total del Estado y del sistema político. Llegada esa ruptura, la acción directa, masiva, plebeya y en muchos casos descompuesta, no cesa hasta que, debido a la lógica de la guerra y a la sucesiva eliminación de las facciones, una fuerza domina la escena e instaura un nuevo orden necesariamente autoritario. Se instala un nuevo monopolio del poder y se aplasta, se desmantela o se integra a todos aquellos brotes de oposición, pero jamás se les acepta como un interlocutor (otro, exterior), con un espacio ganado y una continuidad asegurada.

En efecto, las luchas, tradicionalmente, al no encontrar espacios o canales intermedios para hacer política, y al no ser reconocidas desde su inicio debido al autoritarismo estatal, echaron mano del mayor número de alianzas en una búsqueda precipitada por acumular fuerzas. Ello las condujo a la confrontación, a apostar a ganarlo todo o a perderlo todo; a desquiciar el orden en un incontrolable desencadenamiento de malestares o a destrozarse contra el muro del Estado y su arsenal represivo. Y es que más valía esto que entrar rápidamente en una dinámica

de desgaste, de escisiones internas o de aniquilamiento selectivo ejercido por el tlatoani. Entonces, en México, parecía operar una especie de lógica en la que un actor suicida (las luchas sociales y su dirigencia) y un actor asesino (el Estado) se enfrentaban, convirtiendo en catástrofe casi irremediable los momentos en que se manifestaba la acción directa de la sociedad (el 68 es el ejemplo más espectacular de esto a pesar de la modernidad de sus actores).

No cabe duda entonces, que una invención genial de los años setenta y un hecho que reformó la dinámica sociopolítica del país fue la legitimación de los partidos y grupos de oposición y la apertura del sistema parlamentario. Esto permitió que las vanguardias, en lugar de tender a la confrontación, y para ello a la acumulación de fuerzas tipo 1968 o 1958, o tantos otros sucesos de la historia mexicana, lograran con más facilidad una incrustación en las alturas y, de esa manera, se produjera con más prontitud una escisión con respecto a sus propias bases (la propensión “buropolítica” de nosotros los mexicanos). En la nueva modalidad, las luchas sociales tendieron a desgarrarse más dramáticamente que nunca entre una *acción social* (resistencia a la exclusión, a la dominación, al despojo y a la explotación en una sociedad autoritaria) y una *acción política* (búsqueda por apropiarse del Estado y ejercer su influencia en y desde los aparatos de poder preestablecidos), destruyéndose la integridad de la dirigencia, la relación entre partidos y movimientos, la continuidad de la acción y la consistencia de las identidades. Sólo que ahora todo esto se lograba por una vía no sangrienta, y en eso consiste justamente la genialidad del período que comienza con Reyes Heróles en 1977 y se cierra con las elecciones de 1991. Pero aclaremos una cosa: una vía pacífica no quiere decir necesariamente, y menos en este ejemplo, una vía democrática, puesto que aquí estamos hablando ni más ni menos que de la destrucción constante de las identidades sociales y de su continuidad. El parlamentarismo mexicano está más ligado a la producción de la paz que al fomento de bases democráticas sólidas; más ligado a la continuidad del autoritarismo, que al robustecimiento de lo social, paradójicamente.

VIII

Por lo demás, las elecciones del año 1991 deben ser tomadas como el momento en el que se consolida una nueva forma de articulación sociopolítica en nuestro país. Veámoslo así: hoy resulta obvio que desde su inicio, el régimen delamadridista buscó redefinir la relación entre la sociedad civil mexicana y el Estado, tratando de diluir la densidad de los espacios de intermediación entre lo social-disperso y el vértice de la pirámide. Y es obvio; un sistema tan robusto en aparatos gubernamentales y burocracias para el manejo de lo público (como el heredado por nuestra historia de Estado fuerte —clases altas débiles— cooptación y corrupción sistemática de liderazgos) resultaría como un lodazal para llevar adelante el modelo económico del neoliberalismo.

Así, el régimen delamadridista pareció dispuesto a alimentar desde muy temprano un cierto robustecimiento del Partido Acción Nacional, no sólo para balancear el relativo florecimiento que mostró la izquierda gracias a la reforma política, sino principalmente para atemperar las exigencias del propio partido oficial, es decir, la fuerza de la política tradicional y de “la política como ejercicio público”, y modificar así las reglas del juego, debilitando a las grandes centrales obreras y generando más bien varios polos de poder que dispersaran y fragmentaran, entre otras cosas, la capacidad negociadora del sector laboral. Como si se tratara de destruir, de devastar los promontorios de aglutinación del poder dentro y fuera de la estructura oficial; diluir el hemisferio popular-nacional de la política, para ir logrando un Estado “más pequeño”, menos masivo, pero de una altísima eficiencia y concentración ejecutiva (muy propio de los regímenes burocrático-autoritarios). Frente a este aparato, el esquema original de aquel sexenio esbozaba la necesidad de fomentar una gran cantidad de cuerpos paralelos (junto a la CTM se alentó a la CROM y se le dio fuerza al Congreso del Trabajo, aunque sólo transitoriamente, para romper la continuidad de la primera de estas centrales).

Sin embargo, en lo que hace a los espacios de intermediación partidista y parlamentaria, el sexenio de De la Madrid no logró mucho pues, primero, el PAN resultó ser un catalizador de la oposición inesperadamente poderoso y hubo que reanimar el monopolio priísta, reinaugurando el fraude electoral sistemático que con los años lograría tan impresionante sofisticación; segundo, el terremoto del año 1985 despertó una actividad ciudadana completamente adversa a los objetivos de enfriamiento de la política que, por el contrario, desembocó en la creación de la Asamblea de Representantes, y tercero, muy ligado a lo anterior, el movimiento estudiantil universitario enganchó asombrosamente con el recalentamiento urbano-popular producido por el terremoto y ambos afluentes vigorizaron al cardenismo en ascenso (es decir, vigorizaron al hemisferio popular-nacional que, desde el interior del PRI, se resistía a ser desmantelado), y todo eso potenció la participación de las organizaciones políticas, amplificándolas quizás exageradamente.

Pero los partidos políticos, las cámaras y el juego electoral en general no se mostraron verdaderamente disfuncionales para el régimen, sino hasta que sobrevino el “sustazo” de 1988 y, en consecuencia, no fueron tratados como espacios de alta peligrosidad sino a partir de esa fecha. Los comicios de 1991 ya mostraron la nueva cara reformada, refuncionalizada debiéramos decir, del sistema electoral: una arena censurada y prohibida para las dirigencias de la verdadera oposición, es decir, para todas aquellas formas organizativas e identitarias que amenazaran con cierta consistencia y continuidad. Naturalmente, el enemigo número uno fue el Partido de la Revolución Democrática, pero no tanto por las organizaciones de izquierda que pudieran habitarlo, sino sobre todo por su llamado a lo popular y a la reconstitución de identidades públicas como el ámbito

tradicional, el industrial-moderno o los excluidos. De la misma manera, se puede afirmar que solamente una vertiente del PAN engancha con el nuevo esquema definido desde el Estado, aquella que responde a los sectores modernos-ciudadanos-democráticos-individualistas muy característica de los estados del Norte o de los medios mejor integrados de las grandes ciudades, mientras que las manifestaciones panistas más tradicionales y que cuentan con formas organizativas e identitarias más consistentes (como en Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, etc.) no resultan para nada compatibles con el esquema político neoliberal. En consecuencia, la cuestión no sería tanto definir quién es el adversario público número uno en el nuevo esquema, sino admitir que el adversario número uno es “lo público”.

Que haya diputados en la Cámara está muy bien para este esquema, porque sin eso no se cumple con el expediente democrático que demandan las inversiones y los acuerdos internacionales; que a su vez esos diputados no representen a ningún actor social o fuerza política real sino a la ciudadanía de manera abstracta, es también indispensable para el modelo. En esta perspectiva, el fraude electoral de 1991, dejando de lado el error que significó el exagerado triunfo priísta, muestra bien que desde su diseño todo el operativo estaba orientado hacia el desmantelamiento de las identidades colectivas, los movimientos y las formas de organización alternativas ya fueran panistas, perredistas o de cualquier otra adscripción que ligara representantes con actores colectivos en espacios públicos de organización consistentes y continuos.

Pero el fraude, el manejo del presupuesto público con fines electorales, la prepotencia y el cinismo gubernamentales provocan desánimo, apatía, alejamiento del sistema de partidos (incluso ahí en donde la coyuntura electoral se desborda como en Chihuahua, San Luis Potosí, Tabasco, Guerrero o Guanajuato), como quedó más que claro en todos aquellos estados de la República en donde fue impuesto el priísmo a pesar de la alta participación ciudadana opositora, y con este enfriamiento, se logra un objetivo central del nuevo modelo: el desmantelamiento de las identidades públicas, perfectamente contabilizado en los elevados índices de abstención.

IX

Significa una gran responsabilidad del gobierno, sin embargo, el haber optado por esta vía, porque con ello se desvirtúa ese espacio de producción de la paz social tan privilegiado que ha resultado ser la arena parlamentaria; ese lugar en donde las dirigencias expresan sus malestares, se sienten escuchadas y publicitadas, y se separan irremediamente de las bases sociales y de las movilizaciones que les dieron impulso; ese espacio parlamentario, decíamos, que produce en quienes lo ocupan la impresión de estar yendo hacia las alturas, logrando influencia, acer-

cándose al vértice, al oráculo de la matriz cultural de la mexicanidad (la “buropolítica”, hemos bautizado a este fenómeno).

Destruído ese espacio, que tan bien había combinado nuestra herencia con las instituciones de la modernidad, ¿no estaremos fomentando el regreso a las posiciones que privilegian la confrontación?

Ahora bien, el modelo neoliberal quisiera ver en el lugar destruido de la política, el surgimiento de un basismo constructivo, de una especie de basismo restringido en torno a unidades productivas despolitizadas y desideologizadas, tanto en el medio agrario como en el urbano-popular; así, se buscaría dar impulso a una supuesta propensión empresarial a la manera de *El otro sendero*, del peruano Hernando de Soto. Curiosamente, el régimen salinista ha encontrado funcionales, con respecto a su proyecto, una serie de experiencias maoístas de los años setenta, animadas por Línea Proletaria y Línea de Masas en Chiapas, Sonora, Durango, Chihuahua, Nayarit, Coahuila; experiencias que en aquel momento estuvieron orientadas a la autosuficiencia productiva y de las que hoy se exige una articulación con la economía global (el Pronasol, en gran parte, quisiera basar su actividad en este tipo de experiencias que separan la capacidad productiva de los agregados poblacionales con respecto a sus formas organizativo-identitarias, impidiendo que lo social así atomizado, pueda encontrar espacios de interacción comunicativa más generales).

Estos son en verdad buenos deseos, pero no hay que olvidar que enormes agregados poblacionales se encuentran imposibilitados para echar a andar empresas productivas y costeables (sobre todo ante la inminente globalización mercantil), de manera que la propensión del quehacer social en nuestro país no se orientará fácilmente hacia las tareas productivas atomizadas en la comunidad o en la pequeña empresa, y seguirá tendiendo con facilidad hacia las manifestaciones públicas, hacia la presión, hacia la influencia, y en esa dinámica no dejará de producir liderazgos que encontrarán cerrada la salida hacia la participación política y se orientarán a la búsqueda de las alianzas y a la acumulación de fuerzas, a la confrontación inevitable en nuestra cultura. Y es que los riesgos son elevadísimos cuando una clase política se elitiza, se achica y barre con los espacios públicos alternativos en un país esencialmente político, es decir: no esencialmente económico (de las clases poseedoras), no esencialmente ideológico-religioso, sino esencialmente estatal.

Digamos que la compleja coexistencia entre: *a*) regímenes democrático-electorales en, *b*) sociedades con desigualdades crecientes sólo se explica por, *c*) la erosión deliberada de lo público (de las identidades colectivas), y esto último se ha hecho posible gracias a la interrelación de los siguientes factores: pobreza creciente + cambio acelerado + desorden social y atomización + segmentación del mercado político + tendencia en el medio popular hacia la individualización defensiva y anómica + tendencia en el medio integrado hacia el consumismo individualista posesivo que transfiere la culpa de las desigualdades al fracaso del Estado de

bienestar + propensión natural de la matriz sociopolítica mexicana a que los liderazgos asciendan hacia el vértice de la pirámide (hacia el lugar del Estado), descuidando, e incluso actuando en detrimento de las identidades sociales.

X

Si estuviéramos de acuerdo con lo anterior, deberíamos preguntarnos si las ciencias sociales no le estarán haciendo el juego (en muchas ocasiones inconscientemente) a ciertas ideologías del poder cuando utilizan de manera excesiva los conceptos “tránsito a la democracia” o “consolidación de la democracia” para calificar la nueva etapa latinoamericana.

Veámoslo así, la nueva etapa de globalización de la economía plantea una nueva distribución de los actores sociales en el pacto desarrollista, y por ello se puede hablar de un modelo societal claramente distinto del *populista-sustitutivo* que se aleja crecientemente de los principios de la democracia social. En nuestra época sucede que algunos de los actores más vinculados al mundo moderno industrial no son necesariamente los actores incluidos en el pacto para el desarrollo globalizador; los sectores obreros ligados al núcleo privilegiado del nuevo modelo (a la industria de exportación: maquila, agroindustria, automotriz, petrolera, etc.) quedan completamente excluidos desde el momento en que cualquier elevación en sus condiciones salariales resulta como arena para el engranaje del modelo exportador, cuyo éxito depende de la competitividad de los productos en el mercado mundial y ésta se encuentra en función directa de los bajos costos en materia salarial.

Lo paradójico también consiste en que, si bien en el interior de la empresa o digamos, en el interior del espacio productivo la clase trabajadora de la globalización deja de ser un miembro de la alianza estatal, no sucede así desde el punto de vista de su inserción en el espacio popular, en el barrio, en el poblado, etcétera, en donde el obrero (en tanto sujeto popular) es reconstituido como un sujeto integrante del pacto nacional. El salario está cada vez más castigado, aunque algunos subsidios sean entregados por el presidente a manera de “solidaridad” con la pobreza en forma casi personal y sin mediaciones organizativas. Desde esta perspectiva, se puede llegar a pensar que en casos extremos y bien localizados, se haría factible otorgar un subsidio disfrazado al salario en el caso de aquellas empresas conectadas con el circuito internacionalizado: bajísimos salarios pagados en la empresa (para mantener la competitividad internacional) y dineros públicos, a manera de sobresueldo o subsidio a la clase obrera exportadora o, lo que es lo mismo, subsidio a las exportaciones, vía inversión directa en necesidades barriales, de abasto, transporte, etc. Pero claro, todo ello de manera muy circunscrita y localizada, entregado como dádiva por el patriarca, presidente o tlatoni.

En esta medida el Estado, en el modelo neoliberal-dependiente, deja de ser en efecto un Estado populista, pues este último es impensable sin la clase obrera y sus corporaciones sindicales, lo que no permite, tampoco, calificarlo como un Estado antipopular. Es cierto que en términos materiales, sociológicos y humanos, todo el modelo tiende a excluir y a pauperizar a una masa cada vez más extensa de la población, absoluta y relativamente hablando (y la clase obrera ligada al aparato exportador es pequeña), pero en términos del tipo de Estado y de régimen, tiene que ser tomado muy en cuenta el hecho de que la relación líder-masas recobra una importancia que parecía en retirada hacia el fin de la etapa sustitutiva, cuando sindicatos, empresarios y clases medias, debido al exceso de demandas, pusieron en jaque la alianza populista en toda América Latina hasta destruirla (con la subsecuente militarización).

En efecto, resulta que el actual panorama nos presenta: *a*) una relación renovada y hasta fortalecida entre el líder y las masas (lógica popular); *b*) una exclusión y una represión severa hacia la clase obrera y sus organizaciones; *c*) una amalgama entre el Estado y el gran capital internacionalizado; *d*) un desprecio total por todos los actores no reciclables de la etapa sustitutiva (no sólo obreros sino también los empresarios no reconvertibles competitivamente, grandes, medianos o pequeños); *e*) una pauperización y una desorganización crecientes de las masas campesinas, obreras, populares y de los sectores medios y, *f*) un desmantelamiento acelerado de las organizaciones, instituciones o espacios de intermediación y formación de identidades colectivas entre lo social disperso y el Estado (sindicatos, coordinadoras, centrales, movimientos sociales, el sistema educativo y universitario, los medios de comunicación de masas, etcétera, adoptando, incluso los partidos y las cámaras, una nueva "distancia" con respecto de lo social).

En este panorama, las cúpulas corporativas de la etapa de sustitución pueden seguir en el interior del reducido "núcleo duro" estatal, pero sólo bajo la condición de renunciar, ahora más claramente que nunca, a cualquier tipo de defensa de sus agremiados, convirtiéndose en instrumentos de represión y aislamiento de liderazgos y acciones opositoras y en aparatos de destrucción de la identidad colectiva de sus bases.

Alguna vez se nos ocurrió calificar a este nuevo contexto como el de un "Estado de exclusión", lo que no deja de tener sentido porque denota bien la posición de exterioridad, pauperización y anomia de, sin duda, dos de cada tres mexicanos y latinoamericanos. Sin embargo, resulta una clasificación demasiado sociológica y económica, adecuada más bien para caracterizar a las dictaduras burocrático-autoritarias de los años setenta y los ochenta en el cono sur, pero limitada para dar cuenta del Estado neoliberal y su liderazgo en su articulación reciente con el pueblo. En esta tesitura, Guillermo O'Donnell ha propuesto la denominación "democracias delegativas", lo que es muy adecuado porque pone el énfasis en la referida destrucción de los espacios de intermediación tan propia del quehacer político neoliberal, pero que tiene el inconveniente de dar por sentado, desde el título

mismo, aquello que justamente está siendo puesto en cuestión, es decir, la democracia, o la transición hacia la democracia o la consolidación democrática en México y en América Latina.

XI

En estas condiciones, para qué hablar de un tránsito a la democracia y por qué no hablar mejor de lo que es evidente: que la etapa neoliberal o de economía globalizada requiere en forma cada vez más clara de algún tipo de régimen autoritario, que todavía no sabemos cómo calificar, pero cuyo autoritarismo (y no su objetivo democratizador) resulta plenamente funcional, sobre todo cuando tiene como receptáculo a un país esencialmente estatal como México.

Así, en el caso de América del Sur, particularmente del cono sur y Brasil, se podría decir que, de una “situación oligárquica”, se pasa a una situación “popular-nacional o populista” y luego a una que hoy conocemos como “burocrático-autoritaria” (O’Donnell, Garretón, Cavarozzi), capaz de enfriar el exceso de demandas de todos los miembros de la alianza pluriclasista de la etapa anterior para, a partir de ahí, confluír en un momento de “tránsito a la democracia” y de pretendida “consolidación” de ésta, hasta rematar en el momento actual, aún difícil de conceptualizar con precisión, pero que exhibe los rasgos combinados que enunciarnos tres párrafos más arriba.

Digamos que México corresponde, en el punto de partida y de llegada, con esta clasificación, aunque ha podido simplificar las etapas intermedias gracias a la función central del Estado. Aquí se podría establecer que, desde un “Estado fuerte oligárquico” (porfiriato), pasamos a uno “popular-nacional” (con su clímax en el cardenismo), readecuándonos a continuación a un “Estado populista-desarrollista” (desde Alemán hasta Echeverría), para rematar en un “Estado globalizador autoritario” o, digamos, el que corresponde al momento de la *globalización autoritaria y polarizante*¹³ (GAP) (que da inicio con López Portillo en su apertura al exterior, aunque sin expulsar a nadie de la alianza estatal, gracias al petróleo y los préstamos dulces, y exhibe ya su forma más terminada con Salinas de Gortari a partir de 1989).

Importa ahora subrayar una recurrencia a propósito del funcionamiento matricial del caso mexicano en tanto *país estatal*. En efecto, como lo establecimos al inicio de este artículo, si algo llama la atención en el nuevo reparto de fuerzas sociales de la etapa globalizadora, es el debilitamiento acelerado de todos los actores en el plano de la sociedad civil, organizados en el ámbito nacional, y que más o menos embarnecieron a lo largo de la etapa de sustitución de importaciones. Una vez más en la historia de México, debido ahora al libre comercio, a la competencia interna-

¹³ Proponemos lo de *polarizante* mejor que *excluyente*, por las razones aludidas en torno a la apelación al pueblo y a la pobreza en el modelo actual.

cional y al enorme desorden desarticulador legado por la crisis y acentuado por la globalización acelerada, parecen verse barridas las fuerzas intermedias civiles de la etapa populista desarrollista. Del lado de las clases altas, el empresariado medio sufre una merma considerable por su baja competitividad, a diferencia de lo sucedido en el neoliberalismo chileno y, paralelamente, son muy pocas las empresas más grandes de la etapa sustitutiva que resultan viables y pueden permanecer en manos de un empresariado sólido en la escena nacional; las más de las veces, junto a la cantidad enorme de quiebras, estos empresarios prefieren convertirse en comerciantes importadores de los artículos que antes producían, o volverse firmas subsidiarias, asociarse o vender sus empresas al capital extranjero, cuando no tomar el camino de la especulación bursátil.

Del lado de la clase obrera, el desmantelamiento es aún mayor: achicamiento cuantitativo de la masa de trabajadores ligada a la industria; atemorización y reclusión defensiva por la amenaza constante de recortes de personal; caída salarial; sustitución de viejas empresas por nuevas con mano de obra más joven, con menor escolaridad, mayor productividad y en regiones geográficas muy distintas (norteñización); decadencia marcada de los sindicatos, de las organizaciones y de las legislaciones laborales; total desprestigio y ataque furioso desde el Estado y la sociedad hacia las formas asociativas-corporativas que se traducen en “bienestar inmerecido” y corrupción, etcétera. Los llamados sectores medios asalariados también sufren los mismos embates enumerados anteriormente, y en forma aguda en lo que se refiere a la amenaza de despidos ante el achicamiento severo de los empleos estatales, y tienden a recluirse en lo privado, apartándose de las formas asociativas y de la participación política, convencidos de que los populismos, los socialismos centralizados, la política en las calles, las asambleas, los sindicatos y la plaza pública sólo redundan en liderazgos sin control y en inseguridad del empleo. Por lo demás, los centros universitarios, los organismos de cultura, etcétera, cuando no son desmantelados deliberadamente por la vía presupuestal y convertidos en élite en consecuencia, terminan, como en un círculo vicioso, apartados de sus referentes sociales y de sus identidades de bases debido a la apatía, la reclusión en lo privado y la crisis de participación ciudadana en general.

Barrido completamente el campo de las intermediaciones y debilitados a tal grado los actores propiamente sociales legados por la etapa de industrialización nacional, nos encontramos ante un panorama abonado para el regreso del Estado fuerte, una vez más en la historia de este país estatal, lo que pone en evidencia que la transición a la democracia ha sido una mera cortina de humo, y que lo que realmente se avizora es la transición a algún tipo de autoritarismo con actores sociales debilitados; la derrota de la sociedad ante el Estado, la técnica y los intereses económicos de un puñado de compañías aferradas a la mundialización de las economías.

En esta medida, en el núcleo del Estado sí existe una alianza con la clase capitalista transnacionalizada, lo que podría conducir a calificarlo como un “Estado

de clase”, pero una clasificación de este tipo haría perder de vista que no son en lo fundamental los agentes económicos en tanto agentes clasistas (o compañías trasnacionales) quienes aseguran el éxito del modelo globalizador (lo que implicaría un achicamiento y casi desaparición del aparato estatal según la receta del neoliberalismo), sino que es la capacidad de fortaleza y autoridad del Estado lo que está resultando fundamental para el éxito del modelo globalizador en las sociedades de América Latina, pero también en las sociedades exitosamente globalizadas de Asia. Claro está que esa fortaleza y autoridad se pueden lograr por constelaciones histórico-sociales, como en el caso mexicano o asiático, o por situaciones de extrema emergencia como son el desbordamiento social incontrolado o la amenaza de guerra civil o, en fin, todas aquellas situaciones capaces de colocar a un actor incontestado al frente del proyecto globalizador.